

Las propuestas de Piketty contra la desigualdad

Alternativas para superar el
actual «capitalismo privado»

JORDI SEVILLA

En su último libro (*Capital e ideología*. Deusto, 2019), Thomas Piketty presenta alternativas para superar el actual «capitalismo privado», origen de la desigualdad vigente, mediante un «socialismo participativo» que descansa sobre dos pilares: la propiedad social y el reparto de los derechos de voto en las empresas, por una parte; la propiedad temporal y la circulación del capital, por otra.



Thomas Piketty.

Foto: © Emmanuelle Marchadour.

Lo novedoso de la aportación de Piketty en este libro es su propuesta de repartir la riqueza a través de dos mecanismos: un nuevo impuesto progresivo sobre el patrimonio cuya recaudación financiaría una dotación básica y universal de riqueza a recibir a los 25 años y, en segundo lugar, ampliando hasta el 50% los derechos de voto de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas tras facilitarles el acceso a la propiedad mediante compra de acciones.

Y lo hace basándose en una idea de Atkinson y tomando como modelo los «repartos de tierra» en sistemas agrarios con grandes latifundios, convencido de que «el aumento de las desigualdades es, junto al cambio climático, uno de los principales retos a los que el planeta se enfrenta a comienzos del siglo XXI» (p. 784). Si bien en

Europa «la desigualdad de rentas [...] ha aumentado de manera significativa desde los años ochenta» (p. 780), todavía lo ha hecho más la desigualdad de la riqueza hasta el punto de decir que «la fortísima concentración de la propiedad privada, sumada a una gran opacidad financiera y fiscal, es una de las principales características del régimen desigualitario neopropietarista mundial a comienzos del siglo XXI». Por ello, «la distribución de la propiedad es una cuestión crucial en el siglo XXI» (p. 822), sobre todo para mantener a la clase media y revertir su actual desmoronamiento.

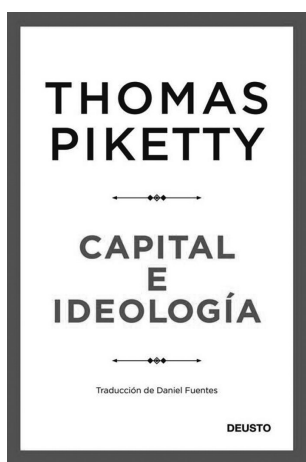
UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DE LA RIQUEZA

Frente a quienes defienden la propiedad privada como fundamento de la libertad personal, el autor, tras constatar que buena parte de la adquisición privada de propiedad se ha hecho abusando de los mecanismos del poder estatal (privatizaciones en países excomunistas, sectores regulados por el poder, etc.) o apropiándose de bienes comunes, como el conocimiento, y que buena parte del aumento reciente de la riqueza se ha debido a factores especulativos en sectores como el inmobiliario y el bursátil, propone reforzar la libertad de todo el mundo mediante un reparto más equitativo de la riqueza que no elimine, pero reduzca, la actual desigualdad.

El libro que comentamos es, según el propio autor, un complemento de su célebre libro anterior, *El capital en el siglo XXI* (Fondo de Cultura Económica, 2014), donde trataba la historia del capital y de su acumulación. Aho-

ra ha efectuado un extenso repaso sobre la historia y el futuro de los regímenes desiguales, cuya necesidad señaló en la respuesta a sus críticos (*Debatiendo con Piketty*. Deusto, 2017) cuando dijo «sería recomendable asumir un estudio más profundo de la génesis intelectual de las ideas sobre la desigualdad» ya que, según el autor, «la desigualdad no es algo natural» sino que requiere una explicación, una justificación de las reglas que permiten una adquisición legítima de la propiedad por parte de un grupo o un individuo. Este relato depende de instituciones y visiones ideológicas y políticas que no han hecho más que cambiar a lo largo de la historia.

Ambos libros están unidos por un mismo proyecto intelectual que se fundamenta en que la propiedad privada del capital está en el centro del debate sobre la desigualdad a lo largo de la historia. En palabras del autor, la desigualdad está promovida por razones ideológicas y políticas mucho más que económicas o tecnológicas. Apoyado por una ingen-



La distribución de la propiedad es una cuestión crucial en el siglo XXI, sobre todo para mantener a la clase media y revertir su actual desmoronamiento, afirma Piketty

te cantidad de datos mundiales, la aportación de Piketty se centra en «demostrar», según él, cuatro puntos esenciales:

1. Los beneficios crecen a una tasa superior a la que lo hace la economía, por lo que la desigualdad tiende a crecer como consecuencia de una progresiva concentración de renta y de riqueza.
2. No se habla, tanto, de los beneficios obtenidos por el esfuerzo de un emprendedor que aporta a la sociedad y obtiene algo a cambio sino por la riqueza incrementada por alguien que la ha heredado y la ve crecer como consecuencia de la especulación o de apropiación ilícita de bienes comunales como consecuencia de disponer de una posición de dominio (el ganador se lo lleva todo, sobre todo si es amigo del poder). Con ello, se rompe la relación esfuerzo y enriquecimiento lícito. Aparece una casta que se consolida mediante la herencia.
3. Toda propiedad privada debe mucho a los esfuerzos públicos acumulados (tesis también de Mariana Mazzucato). Nada es enteramente privado en la generación de los negocios, por lo que no puede ser enteramente privada la apropiación de sus beneficios.
4. Los impuestos y el Estado juegan un papel clave en mitigar la desigualdad, esta vez más de riqueza que, incluso, de renta. Por eso hace más hincapié en figuras tributarias sobre la riqueza y la herencia buscando una redistribución de la riqueza más que una redistribución de la renta.

Aunque ya Rousseau señaló al derecho de propiedad como causa de la desigualdad entre los hombres y Proudhon habló de la propiedad como «un robo», fue Marx quien con más rotundidad señaló a la propiedad privada de los medios de producción

«La desigualdad no es algo natural», requiere una justificación de las reglas que permiten una adquisición legítima de la propiedad por parte de un grupo o de un individuo

como el eje central de un sistema social que dividía a la sociedad en clases desiguales, poniendo en marcha una dialéctica que, además, tendía a incrementar esa desigualdad entre capital y trabajo hasta llegar a la «pauperización de la clase trabajadora». Y fue Keynes quien propuso, en defensa del capitalismo, la necesidad de introducir importantes correcciones al disfrute privado de la propiedad mediante impuestos progresivos que financiaran políticas sociales destinando todo ello a compensar con medidas redistributivas la tendencia natural del capitalismo a agrandar las diferencias sociales hasta un punto que resultaba peligroso para los valores liberales, como demostró la crisis del 29 y su influencia sobre el ascenso de movimientos antidemocráticos como el fascismo, el nazismo o el comunismo. Defender una democracia liberal exigía, ya entonces, poner límites legales a la propiedad privada que abriera el espacio a esa igualdad de oportunidades que debería activar el ascensor social para que ningún individuo quedara atrapado por una desigualdad heredada por la clase social de la familia en la que nace.

Se desarrolló, así, una cultura del esfuerzo individual y de la meritocracia reconocida, en la que Estado jugaba un papel fundamental poniendo los instrumentos para evitar aquella desigualdad debida a factores sobre los que el individuo no tiene ninguna influencia. Mejorar las oportunidades de los menos favorecidos se convirtió en la razón de ser de la democracia social.

Si para los marxistas, acabar con la propiedad privada de los medios de producción era la única manera de poner fin a la desigualdad social, los keynesianos se conformaban con dotar de un papel relevante al Estado como el instrumento que con sus regulaciones y políticas redistributivas compensaría la fuerza centrífuga de la propiedad privada, creando una fuerza compensadora suficiente como para mantener las diferencias sociales dentro de unos límites tolerables y compatibles con la democracia liberal.

CRECIENTES TENSIONES SOCIALES

La tesis que defiende Piketty es que esto fue así hasta que «la revolución conservadora de los años ochenta, el colapso del comunismo soviético (el fracaso de la socialdemocracia) y el desarrollo de una nueva ideología neopropietarista han llevado al mundo a principios del siglo XXI a niveles extraordinarios y descontrolados de concentración de la renta y la riqueza, generando así crecientes tensiones sociales en todas partes» (p. 1.140). En otras palabras, la ideología neopropietarista de principios del siglo XXI se apoya en grandes narrativas entre las que cuales están «el fracaso del comunismo, el miedo al vacío que genera la

posibilidad de redistribuir riqueza y un régimen de libre circulación de capitales sin regulación, sin información compartida y sin una fiscalidad común» (p. 844). Y añade: «La culpabilización de los más pobres [...] constituye uno de los principales rasgos distintivos del actual régimen desigualitario» (p. 848), en una ideología que va de la mano «de un discurso de exaltación de empresarios y multimillonarios» (p. 852).

Utilizando el amplio despliegue de datos a los que ya nos acostumbró en el anterior libro, el autor constata que, a pesar de que la población y la renta per cápita se han multiplicado por diez desde el siglo XVIII, esta evolución positiva no ha sido lineal y esconde muchas desigualdades y debilidades. En concreto, entre 1980 y 2018, aunque los más pobres han mejorado su posición, las grandes fortunas han crecido mucho más de lo que lo ha hecho la economía y, además, la riqueza se ha concentrado en los más ricos, haciendo que las clases medias hayan sido los grandes olvidados del crecimiento económico: «Asistimos a un aumento de las desigualdades en prácticamente todas las regiones del mundo desde 1980». Este hecho entra en abierta contradicción con el discurso hegemónico en favor de un libre acceso a las posibilidades de una sociedad

La propiedad privada del capital está en el centro del debate sobre la desigualdad a lo largo de la historia. Según Piketty, la desigualdad está promovida por razones ideológicas y políticas mucho más que económicas o tecnológicas

abierta que permite a cada cual desarrollar libremente sus capacidades.

El autor dedica 1.143 páginas del libro a estudiar la dimensión política e ideológica de «la transformación de los regímenes desigualitarios desde las antiguas sociedades trifuncionales y esclavistas hasta las actuales sociedades hipercapitalistas y poscomunistas, sin olvidar las sociedades propietaristas, coloniales, socialdemócratas y comunistas» (p. 859). Y «solo» 182 a presentar su alternativa en la que propone superar el actual capitalismo privado, origen de la desigualdad vigente, mediante lo que llama un «socialismo participativo» que tiene dos pilares esenciales: «La propiedad social y el reparto de los derechos de voto en las empresas y, por otra parte, la propiedad temporal y la circulación del capital» (p. 1.172) evitando grandes concentraciones que se heredan. En suma, defiende Piketty que «el bloque patrimonial, compuesto por el impuesto progresivo sobre la propiedad y por la dotación universal de capital, tiene un impacto estructural de largo plazo en la distribución de la riqueza y el poder económico» (p. 1.185).

«UN CAPITALISMO PROGRESISTA»

Piketty ha conseguido ser un fenómeno mediático sin perder la atención del mundo académico y ha situado, junto a otros autores como Branco Milanovic, el problema de la desigualdad en el centro de los debates y las preocupaciones desde el FMI, hasta las reuniones de Davos. Y lo hace desde una dura crítica al capitalismo actual y unas propuestas abiertamente ideológicas que situaríamos hoy

a la izquierda del espectro político, aunque formen parte del antiguo consenso socialdemócrata de la posguerra mundial. Resulta imposible no tener en cuenta sus aportaciones, sobre todo, por todos aquellos preocupados por defender el modelo económico capitalista mediante las reformas necesarias para que vuelva a ser un sistema inclusivo (el Nobel Stiglitz habla de la necesidad de un «capitalismo progresista» en su último libro) que no vaya, como ocurre hoy, expulsando gente y perdiendo apoyo social. Piketty habla, en suma, de nosotros hoy y de nuestro futuro compartido. Por eso, tal vez, lo que dice tiene el impacto que tiene y no deja indiferente a nadie. ■

Jordi Sevilla es presidente del Consejo Social de UNIR. Ha sido ministro de Administraciones Públicas.